

FOJA: 250. Doscientos
cincuenta.

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 12º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-26188-2016
CARATULADO : LABORATORIOS MAVER S.A. / SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

Santiago, veinticuatro de Septiembre de dos mil veinte

VISTOS:

Que con fecha 19 de octubre de 2016, compareció don Jorge Meneses Rojas, abogado, en representación de LABORATORIO MAVER S.A., persona jurídica de derecho privado y del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en calle Magdalena N° 140, piso 20, comuna de Las Condes, Santiago, quien dentro de plazo legal y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, dedujo reclamación en contra del FISCO DE CHILE- SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA, representado por a Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, doña IRMA SOTO RODRÍGUEZ, abogada, ambas domiciliados en Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, solicitando que se acoja la reclamación y en consecuencia se dejen sin efecto; 1) Resolución Exenta N° 4.626 de 2016 de fecha 7 de junio de 2016 y Resolución Exenta N° 6.883 de 2016, de fecha 21 de septiembre de 2016 notificada con fecha 13 de octubre del mismo año o en su defecto se rebaje la multa, de conformidad a los fundamentos en que se ampara y que describe como sigue:

Refiere que con fecha 2 de noviembre de 2015, se realizó una fiscalización sobre el manejo de residuos peligrosos por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana a las dependencias de Laboratorios Maver, ubicadas en Las Encinas N° 1777, comuna de Lampa. Añade que como consecuencia de dicha inspección se levantó el Acta de Inspección N° 108236, que constató una serie de infracciones que enumera.

Indica que oportunamente se presentaron los descargos y documentación que aclaraba algunos hechos y observaciones y además, daba cuenta que se habían subsanados los demás hechos constatados.

Apunta que a pesar de lo señalado anteriormente, La Resolución Exenta N°4.269 de fecha 7 de junio de 2016, notificada con fecha 17 de junio de 2016, resuelve condenar a



Foja: 1

LABORATORIO MAVER S.A., al pago de una multa a beneficio fiscal de 60 UTM. Que, dedujo recurso de reposición que fue desechado con fecha 21 de septiembre de 2016, mediante Resolución Exenta N°6883-2016.

Argumenta que las Resoluciones Exentas N°s 4626/2016 y, 6883/2016 adolecen de falta de motivación, lo que causa indefensión al demandante.

Funda tal aseveración, en que el Acta de Inspección, da cuenta de haberse detectado por el fiscalizador, que las instalaciones destinadas a almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos contaban, con una serie de deficiencias que podrían constituir infracciones sanitarias. Sin embargo, al presentar los descargos, la demandante acreditó de manera suficiente que las observaciones realizadas por el fiscalizador, o bien no eran efectivas, o bien habían sido corregidas de manera rápida y definitiva, sin embargo menciona que, aun cuando la resolución impugnada reconoce que los defectos fueron subsanados, no los considera al momento de resolver y determinar la concurrencia de una infracción sanitaria o la entidad de la sanción que se aplicó a la demandante. Destaca al respecto, que la resolución reclamada, prescinde totalmente de las consideraciones formuladas por Laboratorio Maver S.A. en sus descargos, así como de los medios de prueba aportados al sumario, pues de haberlo hecho necesariamente habría arribado a una conclusión diferente, y resuelto que la imposición de una sanción resultaba innecesaria, por ausencia absoluta de riesgo o peligro de la salud, o bien, que sólo resultaba procedente imponer una sanción considerablemente menor y proporcionada.

Sostiene que si bien el Acta de Inspección de conformidad al artículo 166 del Código Sanitario, basta para dar por acreditados la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos, no libera a la autoridad sanitaria de su obligación de fundamentar la decisión adoptada. Agrega que la disposición referida permita tener por acreditados los hechos consignados en el acta de inspección (i) supone que dichos hechos han sido apreciados de forma directa por el funcionario fiscalizador que levantó el acta; e (ii) implica que a falta de otros medios de prueba, dichos hechos pueden tenerse por suficientemente acreditados. Asimismo, menciona que la Resolución Exenta N° 4.269 de 2016, no contiene una descripción precisa y clara, de las infracciones que la autoridad sanitaria estima han sido cometidas por MAVER, así como tampoco una fundamentación del reproche que se le efectúa.

En definitiva, sostiene que la resolución recurrida carece de una motivación en términos tales de contener, además de las conclusiones a la que arriba la autoridad, el razonamiento que le permita alcanzarlas, y determinar, en definitiva, el quantum de la multa impuesta.



Foja: 1

En relación a la resolución Exenta N° 6925-2016, también acusa falta de motivación, en los mismos términos de la anterior y señala que solo se limitó a rechazar el recurso interpuesto.

Afirma que la ausencia de motivación o fundamentación es un vicio invalidante de los actos de la administración. Destaca que si bien las resoluciones exentas reclamadas señalan que el acta de inspección daría cuenta de una serie de hechos, y que ellos a juicio de la Autoridad Sanitaria serían constitutivos de infracción los artículo 3, 7, 8, 25, 27 letra b, 29, 33 y 80 del D.S. N° 148 de 2003 del MINSAL y artículo 3, 18, 19, 36, 37 y 42 del N° 594 de 1999 del MINSAL, no se expresa la forma en que dichas supuestas infracciones se habrían configurado. Argumenta que no se ha expuesto en la Resolución Exenta N° 4.269 de 2016, ni en la Resolución Exenta N° 6.883 de 2016, el proceso lógico y jurídico que da lugar a las decisiones contenidas en la misma, vulnerando el principio de imparcialidad que rige los actos de la administración, expresamente consagrado por el artículo 11 de la Ley N° 19.880, el cual exige, entre otras consideraciones que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos” y, sostiene que además, la motivación se vincula con los principios de juridicidad (art. 6 CPR. Y 2 Ley 19.880), de probidad, transparencia y publicidad (art. 16 Ley 19.880) e impugnabilidad de los actos administrativos (art. 15 ley 19.880). En apoyo, destaca la opinión de académicos sobre la motivación del acto administrativo y jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Temuco (N° Ingreso 882-2016), de lo razonado con antelación reitera que las resoluciones reclamadas evidencian falta de motivación.

En otro punto argumentativo, sostiene que la demandante habría adoptado medidas previas a la fiscalización, las que no fueron consideradas por las resoluciones exentas reclamadas y que desvirtúan parte de las observaciones realizadas por el acta de inspección 1032955. Al efecto, destaca que su representada aclaró que las observaciones referentes a la falta de autorización sanitarias para las bodegas de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos y para la disposición final de los mismos, explicando y acreditando que la obtención de las autorizaciones respectivas se encontraba inserto dentro el proceso de Declaración de Impacto Ambiental realizado por Laboratorio Maver, con el objeto de actualizar la RCA 222/2000 a que el Laboratorio se encuentra sujeto desde hace algunos años y para acreditarlo, afirma que la demandante acompañó copias de los documentos, referentes al acopio y/o acumulación de residuos en las dependencias del Laboratorio ubicadas en Las Encinas N° 1777, comuna de Lampa, que fueron entregados al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana al tiempo de efectuarse la Declaración de Impacto Ambiental, con fecha 30 de enero de año 2015, así como en sus posteriores Adendas.



Foja: 1

Asimismo, destaca que ello fue conocido y considerado por la Autoridad Sanitaria, en el proceso de calificación ambiental, dado que con fecha 2 de noviembre de 2015, es decir, el mismo día de la fiscalización de que da cuenta el Acta de Inspección N° 108236, manifestó en el oficio Ord. N° 5835, su conformidad respecto a la entrega de

los antecedentes necesarios para la obtención de los respectivos permisos ambientales sectoriales. Los que detalla en extenso: “2.1. Un permiso ambiental es el contenido en el artículo 140 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, relacionado con la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basura y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. N° 725 de 1967, Código Sanitario. Al respecto, el titular ha entregado todos los antecedentes necesarios para otorgar este permiso” y, en el 2.2 “Un permiso ambiental es el contenido en el artículo 142 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, relacionado con el permiso para todo sitio de almacenamiento de residuos peligrosos. Al respecto, el titular ha entregado todos los antecedentes necesarios para otorgar este permiso”.

Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la demandante afirma que aun cuando la Seremi de Salud pudiera sostener que cabe alguna responsabilidad a LABORATORIO MAVER en los hechos constatados en el acta de inspección, es preciso considerar la confianza generada en el demandante, debido a la resolución de la propia Seremi de Salud, por lo que sostiene que como consecuencia de lo obrado con anterioridad por esta propia Seremi de Salud en el contexto del Proceso de Declaración de Impacto Ambiental de LABORATORIO MAVER, en que no se advirtió la posibilidad de existir responsabilidad administrativa por parte del demandante, por falta de autorización en sus bodegas de almacenamiento de residuos, no corresponde que ahora se contravenga dicha confianza, sancionando a LABORATORIOS MAVER SA., por dichas circunstancias y en razón de ello, sostiene que la demandada habría vulnerado el principio de confianza legítima en la actuación de la administración, deducido de los principios constitucionales de estado de derecho (artículos 5, 6 y 7 de la CPR) y de seguridad jurídica (artículo 19 N° 26). Siendo este uno de los principales límites al actuar de la administración del Estado y cita en apoyo al profesor Soto Klos y un dictamen de la Contraloría General de la República.

Por último, asegura que LABORATORIAS MAVER, adoptó con posterioridad a la visita inspectiva una serie de medidas tendientes a dar el más estricto cumplimiento a la regulación sanitaria, y en particular a los puntos que fueron observados por el Acta de Inspección N° 108236 los cuales no fueron considerados en modo alguno al tiempo de resolverse el sumario, las cuales detalla como sigue: 1. La empresa no cuenta con autorización de sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos, consistentes en cartón,



Foja: 1

plástico tipo film y una mezcla de papel, plásticos y aluminio, el cual se chipea antes de disponerlo; 2. No cuenta con autorización de disposición final de sus residuos no peligrosos, a los que también se suma basura proveniente del casino; 3. Cuenta con bodega de residuos peligrosos, sin embargo, esta no cuenta con autorización sanitaria; 4. Al exterior de la bodega de residuos peligrosos no existe señalética que indique acceso restringido, uso obligatorio de elementos de protección persona, prohibido fumar y simbología de NCH 2190 of 2003; 5. Sector de bodega de residuos peligrosos no cuenta con sistema de ducha y lava ojos; 6. Al interior de la bodega de residuos peligrosos no existe demarcación en el suelo sobre puntos de acopio de residuos, no posee simbología de NCH 2190, que identifique la peligrosidad de los residuos, ni un orden, ya que se encuentra colapsado, sin dejar pasillos de tránsito interior; 7. En bodega de residuos peligrosos no cuentan con hojas de seguridad de los residuos peligrosos que almacenan, ni un sistema de registro interno que indique nombre del residuo, peligrosidad, cantidad, fecha de ingreso y retiro de bodega; 8. En patio trasero del establecimiento se encuentran aproximadamente 190 envases vados de residuos peligrosos, con simbología de inflamabilidad, dispuestos en contenedores sobre el suelo desprotegido, los cuales no se almacenan al interior de la bodega, y se desconoce su destino final; 9. Al encontrarse bodega de residuos peligrosos llena, se almacenan residuos al exterior (intemperie), envueltos en plástico film, a la espera de realizarse la disposición (residuos y derivados de fármacos principalmente); 10. No posee hojas de seguridad para los residuos que genera, residuos farmacológicos e inflamables, por lo que a su vez, no adjunto dichas hojas de seguridad al momento de hacer el retiro por parte del transportista de residuos peligrosos.”

Finalmente argumenta que la multa de 60 UTM es desproporcionada en relación a los hechos denunciados, especialmente considerando, los descargos vertidos, los numerosos documentos acompañados al sumario sanitario y las medidas posteriores adoptadas por la demandante, con el propósito de dar estricto cumplimiento a la normativa sanitaria vigente.

En mérito de lo expuesto y las normas que cita, solicita tener por deducida reclamación en juicio sumario en contra del Fisco de Chile - Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, representado por la Procuradora Fiscal de Santiago, doña Irma Soto Rodríguez (o quien sus derechos represente, o subroge) ambos ya individualizados, a fin de que el Tribunal, deje sin efecto la multa de 60 UTM impuesta a LABORATORIOS MAVER SA., en subsidio la rebaje sustancialmente, con costas.

Que, con fecha 11 de enero de 2017, consta que se practicó la notificación de la reclamación a doña IRMA SOTO RODRIGUEZ, en representación de Consejo de Defensa del Estado.



Foja: 1

Que, con fecha 17 de enero de 2017, consta la realización del comparendo de rigor con asistencia de los apoderados de ambas partes. La parte demandante ratifica la demanda en todas sus partes, con costas. La parte demandada contesta mediante minuta escrita y solicita se tenga como parte integrante del comparendo.

El Fisco de Chile, contesta la reclamación mediante escrito el que consta a fs. 16, comparece doña IRMA SOTO RODRIGUEZ, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados para estos efectos en Agustinas N°1687, Santiago quien contesta por medio de minuta escrita la reclamación deducida por LABORATORIO MAVER S.A., solicitando su total rechazo, con costas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho de acuerdo a los argumentos que expone como sigue;

En primer lugar destaca que de acuerdo al Acta de Inspección N° 108236, LABORATORIOS MAVER SA., habría incurrido en diversas infracciones, detallando los hechos constatados, los que constan en el relato de la demandante, por lo que a fin de evitar reiteraciones, se tienen presentes en este punto.

Refiere que debido a lo anterior, se citó a la demandante a una audiencia a fin de que formulara sus descargos y en los que señaló encontrarse subsanando las deficiencias constatadas y la SEREMI de Salud Metropolitana mediante Resolución N° 4269 de 7 de junio de 2016, dictó sentencia por la aplicó a la reclamante una multa de 60 UTM por constituir los hechos una infracción a lo dispuesto en los artículos 3,7,8,25,27 letra b) 29,33 y 80 del D.S. N° 148 de 2003 del MINSAL y artículo 3,18,19,3637 y 42 del DS 594 de 1.999 del MINSAL.

Apunta el demandado que la resolución está fundada en;

"f.- "Que los descargos 'no desvirtúan la responsabilidad de la sumariada en los hechos infraccionales constatados en la visita inspectiva.

2.- Que la sumariada debe tener presente que se constató un mal manejo de sus residuos.

3.- Que la sumariada no cuenta con bodega autorizada para almacenar los residuos peligrosos y no peligrosos.

4.- Que almacena residuos a la intemperie.

5.- No cuenta con autorización sanitaria para la disposición final de éstos;

6.- y lo que es más grave se desconoce el destino final que les está dando a sus residuos; son algún (sic) de las deficiencia sanitarias constatadas."



Foja: 1

Afirma que el SEREMI DE SALUD actuó dentro de sus atribuciones legales y, aplicó una sanción en virtud de la existencia de una infracción a un Reglamento vigente (.artículos 3,7,8,25, 27 letra b) 29,33 y 80 del D.S. N° 148 de 2003 del MINSAL y artículo 3,18,19,3637 y42 del DS 594 de 1.999 del MINSAL), además, advierte que las resoluciones impugnados expresan los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan, cumpliéndose a cabalidad en las mismas, lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, Ley19.880, por lo que la reclamante no ha tenido ningún perjuicio de los que alega en la demanda.

Argumenta la defensa fiscal que conforme lo dispone el artículo 171 y siguientes del Código Sanitario, debe desestimarse la reclamación por cuanto, los hechos que motivaron la sanción sanitaria, sí se encuentran suficientemente comprobados en el sumario; que ellos constituyen un infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y que la sanción aplicada, corresponde y es proporcional a la infracción cometida, los que seguidamente detalla:

En primer lugar se refiere a que los hechos infraccionales se encuentran comprobados en el sumario sanitario. Así, los cargos formulados en contra de la reclamante por el acta de infracción Nro. 108236 de 2 de noviembre de 2015 dice relación, por una parte en que:

1. La empresa no cuenta con autorización de sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos.
2. No cuenta con autorización de disposición final de sus residuos no peligrosos.
3. Cuenta con bodega de residuos peligrosos, sin embargo, esta no cuenta con autorización sanitaria.

Apunta que la demandante reconoció expresamente en los descargos formulados en el sumario sanitario que no cuenta con la referida autorización sanitaria, al señalar: *"una vez que se remita la resolución de impacto ambiental, que será cando finalice la evaluación de la DIA en el SEIA, tramitarán de manera sectoral en esta misma entidad los permisos respectivos para la obtención de la resolución sanitaria."*

En cuanto a los demás cargos formulados en el acta de fiscalización, afirma que la demandante en sus descargos, habría señalado que se estarían subsanando.

Destaca asimismo, que los fiscalizadores que levantaron el Acta, tienen calidad de ministros de fe, conforme lo dispone el artículo 166 del Código Sanitario, por lo cual el Acta Inspectiva constituye plena prueba.

En segundo lugar asevera que los hechos que motivaron la sanción efectivamente constituyen una infracción a los reglamentos sanitarios, según da cuenta el Acta de fecha



Foja: 1

2 de noviembre de 2016, efectivamente infringen lo dispuesto en los artículos 3, 7, 8, 25, 27 letra b) 29,33 y 80 del D.S. N° 148 de 2003 del MINSAL y artículo 3, 18, 19, 36, 37 y 42 del DS 594 de 1.999 del MINSAL

En tercer lugar, enfatiza que la sanción que fuera aplicada en el marco del sumario sanitario corresponde y es proporcional a la infracción cometida, dado que la autoridad sanitaria está facultada para imponer multas entre un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales, entre otras sanciones de carácter sanitario.

En mérito de lo expuesto y las normas que cita solicita tener por contestada la reclamación, rechazarla en todas sus partes, con costas.

Llamadas las partes a conciliación, esta no se produjo.

Que, con fecha 24 de enero de 2017, Se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, de acuerdo a los cuales se rindió la prueba.

Que, con fecha 9 de octubre de 2019, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

I. EN CUANTO A LAS TACHAS

Primero: Que, con fecha 1 de agosto de 2017, comparece don Luis Eduardo Cisternas Muñoz, testigo presentado por la reclamada, quien legalmente juramentado y previo a deponer fue tachado de contrario en virtud del artículo 358 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, dado que la parte demandante estima que el testigo tiene vínculos de dependencia con la autoridad sanitaria, más aun al haber levantado en acta de inspección, por lo cual sostiene que el testigo es inhábil para declarar en juicio.

Segundo: Que, al evacuar el traslado conferido, la defensa fiscal se opone a la tacha argumentando que, el testigo actuó como ministro de fe y, que es funcionario público, por lo que su vínculo no es de subordinación y dependencia, considerando que el artículo 1° excluye a los funcionarios públicos sujetos al estatuto administrativo. Añade que además, el testigo cumplió funciones de fiscalizador en su calidad de ingeniero medioambiental, con costas.

Tercero: Que, las tachas se encuentran reguladas a partir del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo en comento, en su inciso segundo dispone que sólo se admitirán tachas que se funden en alguna de las inhabilidades mencionadas en los artículos 357 y 358 del Código Adjetivo, con tal que se expresen con la claridad y especificación necesarias para que puedan ser comprendidas. Asimismo, conviene tener presente que el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil establece las



Foja: 1

inhabilidades absolutas y el artículo 358 del mismo cuerpo legal, se refiere a las inhabilidades relativas, para declarar en juicio.

Teniendo presente lo anterior, cabe aclarar que las inhabilidades relativas para declarar en juicio previstas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, implican imparcialidad para declarar en el juicio que se las invoca, por cuanto, la persona afectada por alguna de las causales contempladas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, está involucrada por parentesco o porque es dependiente del que lo presenta o bien porque tiene interés en el juicio. En este sentido, su juicio o sus dichos podrían estar influenciados.

Cuarto: Que, asimismo es importante destacar, al tenor de lo dispuesto en el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, que solo se admitirán las tachas que se funden en alguna de las causales establecidas en la ley, siempre que éstas se expresen claramente para ser comprendidas.

Quinto: Que, al respecto cabe tener presente que la causal numero 5° dispuesta en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “son también inhábiles para declarar los trabajadores y labradores dependientes de la parte que exige su testimonio”.

Que, respecto de ésta causal, es útil tener presente la antigua legislación laboral que distinguía entre trabajadores y obreros, sin embargo actualmente esta distinción desaparece desde que toda persona que se encuentra bajo un vínculo laboral de subordinación y dependencia se considera como trabajador.

Al igual que en la causal N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, se puede concluir que existen tres elementos necesarios que deben concurrir copulativamente para poder configurar la causal N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que son la dependencia, la habitualidad y la retribución, elementos que a continuación se analizan. La dependencia del testigo con la parte que lo presenta a declarar en juicio es el elemento fundamental que debe ser acreditado y es carga de la parte que invoca esta causal establecer claramente los elementos o factores que dan por configurada la mencionada dependencia.

Que, resulta primordial no perder de vista que la dependencia se encuentra definida en el Derecho Laboral como “el vínculo de subordinación y dependencia” entre el trabajador y su empleador, por lo que evidentemente implica que la persona afectada por la causal en comento, debe tener si no una relación laboral, a lo menos una relación de continuidad, habitualidad, remunerada en la prestación de servicios, para que ésta tacha pueda ser estimada procedente.

Sexto: Que, atendido lo anterior, en cuanto al caso que nos ocupa, el elemento indispensable para configurar la causal prevista en los numerales 4° y, 5° del artículo 358



Foja: 1

del Código de Procedimiento Civil, dice relación con la dependencia laboral existente entre el testigo y la persona que lo presenta a declarar, que se entiende vinculada al concepto de subordinación regulada por la legislación laboral implicando una jerarquización y una relación de subordinación. Además, la dependencia debe ser estable y permanente entre el testigo y la parte que lo presenta a declarar. El fundamento radica en que la dependencia laboral hace presumir al Legislador la pérdida de imparcialidad en la declaración testimonial.

Séptimo: Que, teniendo únicamente presente que la tacha en contra de la testigo no está suficientemente fundada y abunda el hecho que el testigo viene a refrendar lo actuado en el Acta de fiscalización, dado que se trata del ministro de fe que levantó el Acta inspectiva de marras, por lo cual no procede la tacha en cuestión. Atendido lo razonado previamente, se rechaza la tacha que nos ocupa en los términos que se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia.

II. EN CUANTO AL FONDO

Octavo: Que, compareció a estrados don Jorge Meneses Rojas, abogado, en representación de LABORATORIO MAVER S.A., quien dedujo reclamación en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA, (SEREMI RM), representada legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, todos debidamente individualizados con antelación, solicitando al tribunal que deje sin efecto la resolución exenta N° 4.626 de 2016 de fecha 7 de junio de 2016 y Resolución Exenta N° 6.883 de 2016, de fecha 21 de septiembre de 2016 que curso una multa de 60 UTM, o en subsidio que se rebaje esta última, dado que las resoluciones reclamadas adolecen de falta de motivación e incurre en infracción del principio de legítima confianza y, no consideró las aclaraciones hechas por LABORATORIO MAVER SA., como tampoco que la reclamante habría subsanado los hechos constatados, con costas, de conformidad a los fundamentos que se describen en lo expositivo de la presente sentencia.

Noveno: Que, compareció a estrados la defensa fiscal en representación de la SEREMI RM, contestando la reclamación por minuta escrita que consta a fs. 16, mediante la cual solicitó el rechazo de la reclamación argumentando que los hechos que motivaron la sanción fueron comprobados en el sumario sanitario, que constituyen infracción a las leyes y reglamentos sanitarios, y que la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida, de acuerdo a lo consignado en lo expositivo de la presente sentencia. Además, según afirma, las resoluciones reclamadas fueron fundadas, dándose cumplimiento a normativa a la Ley 19.880.



Foja: 1

Décimo: Que, son hechos de la causa por estar exentos de controversia y/o refrendados por los dichos de las partes, en las presentaciones formuladas en la etapa de discusión, los siguientes:

- a) Que, con fecha 2 de noviembre de 2015, se realizó visita inspectiva por funcionario de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana a las dependencias de Laboratorios Maver, ubicadas en Las Encinas N° 1777, comuna de Lampa.
- b) Que como consecuencia de dicha inspección se levantó el Acta de Inspección N° 108236, con una serie de observaciones.
- c) Que, en virtud del acta inspectiva de 2 de noviembre de 2015, N° 108236, se inició un Procedimiento Sanitario al término del cual se dictó sentencia por la autoridad administrativa, con fecha 7 de junio de 2016, condenado a la reclamante a pagar una multa a beneficio fiscal de 60 UTM.
- d) Que, la reclamante, dedujo reposición respecto de la sentencia sanitaria, la que fue rechazada por Resolución Exenta N° 6.883 de 2016, de fecha 21 de septiembre de 2016.

Undécimo: Que, la multa que se reclama constituye una sanción impuesta por la autoridad sanitaria conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del Código Sanitario, contenida en el Libro X, Título III, denominado “De las sanciones y Medidas Sanitarias”, el cual prescribe que: “La infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud Pública de Chile, según sea el caso, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales. Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original.

Duodécimo: Que conforme lo dispone el artículo 171 del Código en comento, de las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia y asimismo el Tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción.

Décimo Tercero: Que a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante aparejó al proceso, con la debida ritualidad procesal y sin objeciones de contrario, los siguientes documentos, acompañados a la reclamación;



Foja: 1

- 1) Copia de Resolución Exenta N° 6.883 de 2016, de 21 de septiembre de 2016, y que en su reverso da cuenta de haber sido notificada con fecha 13 de octubre de 2016.
- 2) Copia del Acta de Inspección N° 108236, de fecha 2 de noviembre de 2015.
- 3) Copia de los Descargos presentados respecto del Acta de Inspección N° 108236, por Laboratorio Maver S.A.
- 4) Copia de la Resolución Exenta N° 061/2015 de fecha 5 de febrero de 2015, emitida por el Director del Servicio de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana.
- 5) Copia del Capítulo 3 denominado “Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable”, de la Declaración de Impacto Ambiental titulada “Actualización de la RCA 222/2000\ presentada por Laboratorio Maver al SEIA, en enero de 2015.
- 6) Copia de la Adenda N° 1 a la Declaración de Impacto Ambiental titulada “Actualización de la RCA 222/2000” presentada por Laboratorio Maver al SEIA, el 7 de agosto de 2015.
- 7) Copia de la Adenda Complementaria, a la Declaración de Impacto Ambiental titulada “Actualización de la RCA 222/2000” presentada por Laboratorio Maver al SEIA, el 20 de octubre de 2015.
- 8) Copia del Oficio Ord. N° 5835, de fecha 2 de noviembre de 2015, emitido por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Décimo Cuarto: Que, a su turno la defensa fiscal a fin de enervar la reclamación deducida en contra de su representada (SEREMI RM),aparejó al proceso copia del sumario sanitario N° 4954/2015 y la declaración de testigo legalmente juramentado que depone al tenor de los puntos de prueba.

Luis Eduardo Cisternas Muñoz (Folio 25))

Señala que es ingeniero en medioambiente, funcionario público de la SEREMI DE SALUD y se desempeña en funciones de fiscalización a fin de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria.

Declara asimismo, que realizó la visita inspectiva a la reclamante el día 2 de noviembre de 2015, en su calidad de ministro de fe de la SEREMI de salud, redactó el acta en la que describe las deficiencias observadas, ratificando las observaciones que constan en la mencionada acta y que derivaron en el sumario, por cuanto en dicha ocasión la empresa reclamante presentaba una serie de deficiencias, tales como no contar con resoluciones



Foja: 1

sanitarias de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, hojas de seguridad de los residuos peligrosos, no poseer sistema de registro de generación de residuos, mantener residuos de carácter inflamables a la intemperie y sobre suelo desprotegido.

Reconoce su firma y ratifica el contenido del Acta de fiscalización que se le exhibe.

Declara asimismo, que regresó a las dependencias de a reclamante con fecha 7 de septiembre de 2016 y observó que aun persistían algunas deficiencias detectadas en la visita del 2015; tales como no acreditar hoja de seguridad para todos los residuos peligrosos, no poseer autorización sanitaria, relacionada al almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, no poseer autorización sanitaria de disposición final de residuos no peligrosos y no mantener sistema de registro de todos los campos requeridos cursando un nuevo sumario sanitario.

Declara que la reclamante habría subsanado algunas deficiencias constatadas en la visita del 2 de noviembre de 2015, que sin embargo otras de mayor relevancia aún persistían. Declara también, que las deficiencias constituyen infracciones a la normativa sanitaria.

Décimo Quinto: Que, considerando la órbita de competencia otorgada a esta judicatura, corresponde determinar si los hechos que motivaron la sanción se encuentran comprobados en el Sumario Sanitario de acuerdo con lo que prescriben las normas del Código Sanitario y si estos fueron considerados en la sentencia y si dichos hechos son constitutivos de sanción y si la sanción aplicada está ajustada a derecho.

Décimo Sexto: Primeramente se tiene presente que el artículo 166 del Código Sanitario dispone que: “Bastará para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”, por lo que esta presunción, simplemente legal, puede ser desvirtuada por prueba en contrario.

Décimo Séptimo: Que, los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, en el procedimiento administrativo de marras, al tenor de las copias del Sumario Sanitario N° 4954 del año 2015, acompañado por la reclamada a fojas 16 y siguientes –el cual tiene naturaleza de instrumento público conforme lo previene el artículo 1699 del Código Civil, y tiene el valor probatorio que le asigna el artículo 1700 del mismo cuerpo legal–, consta la existencia del acta de inspección respectiva, levantada por el Inspector Luis Cisternas Muñoz– que conforme dispone el artículo 156 del Ramo Sanitario ostenta el carácter de Ministro de Fe–, quien con fecha 2 de noviembre de 2015, se apersonó a las dependencias de LABORATORIO FARMACEUTICO MAVER SA.,, ubicado en Las Encinas N°1777, Lampa, con el objeto de realizar una inspección, en razón de un plan de vigilancia, constatándose los hechos que constan en el Acta 4954 (108236);



Foja: 1

1. La empresa no cuenta con autorización de sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos, consistentes en cartón, plástico tipo film y una mezcla de papel, plásticos y aluminio, el cual se chipea antes de disponerlo;
2. No cuenta con autorización de disposición final de sus residuos no peligrosos, a los que también se suma basura proveniente del casino;
3. Cuenta con bodega de residuos peligrosos, sin embargo, esta no cuenta con autorización sanitaria;
4. Al exterior de la bodega de residuos peligrosos no existe señalética que indique acceso restringido, uso obligatorio de elementos de protección persona, prohibido fumar y simbología de NCH 2190 of 2003;
5. Sector de bodega de residuos peligrosos no cuenta con sistema de ducha y lava ojos;
6. Al interior de la bodega de residuos peligrosos no existe demarcación en el suelo sobre puntos de acopio de residuos, no posee simbología de NCH 2190, que identifique la peligrosidad de los residuos, ni un orden, ya que se encuentra colapsado, sin dejar pasillos de tránsito interior;
7. En bodega de residuos peligrosos no cuentan con hojas de seguridad de los residuos peligrosos que almacenan, ni un sistema de registro interno que indique nombre del residuo, peligrosidad, cantidad, fecha de ingreso y retiro de bodega;
8. En patio trasero del establecimiento se encuentran aproximadamente 190 envases vados de residuos peligrosos, con simbología de inflamabilidad, dispuestos en contenedores sobre el suelo desprotegido, los cuales no se almacenan al interior de la bodega, y se desconoce su destino final;
9. Al encontrarse bodega de residuos peligrosos llena, se almacenan residuos al exterior (intemperie), envueltos en plástico film, a la espera de realizarse la disposición (residuos y derivados de fármacos principalmente);
10. No posee hojas de seguridad para los residuos que genera, residuos farmacológicos e inflamables, por lo que a su vez, no adjunto dichas hojas de seguridad al momento de hacer el retiro por parte del transportista de residuos peligrosos.

Que debido a los hechos constatados, fue citado el representante Legal del establecimiento.

Que, consta en el mencionado sumario sanitario, que la sumariada (Reclamante), habría formulado descargos a los hechos constatados por la fiscalización, destacando las medidas adoptadas para subsanar las observaciones formuladas por los fiscalizadores y consignadas en el Acta respectiva.



Foja: 1

Qué asimismo, es conveniente tener presente que la sentencia enuncia cada uno de los hechos consignados y observados en el Acta de fecha 2 de noviembre de 2015, citando las normas infringidas y hace presente que LABORTORIOS MAVER SA., se encuentra subsanando cada una de las deficiencias que fueron constatadas en la visita inspectiva, resolviendo sancionar por la responsabilidad que le cabe en los hechos materia del sumario, aplicando una multa de 60 UTM.

Décimo Octavo: Que, habiéndose acreditado en el considerando anterior que los hechos que motivaron la sanción se encuentran comprobados en el Sumario Sanitario, corresponde determinar si aquéllos constituyen una infracción a las leyes o reglamentos, específicamente a los artículos 4, 7, 8, 25, 27 letra b, 29, 33 y 80 del DS. N° 148 de 2003 y los artículos 3, 18, 19, 36, 37 y 42 del DS N° 594 de 1999, ambos del MINSAL.

Décimo Noveno: Que, de acuerdo a lo consignado en el acta de 2 de noviembre de 2015, y revisadas las normas que resultaron infringidas según lo establece la sentencia administrativa de 7 de junio de 2016, esto es; que los residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la Norma Chilena Oficial NCh 2.190 of.93. Esta obligación será exigible desde que tales residuos se almacenen y hasta su eliminación (art. 4, DS 148/2003), quedando expresamente prohibido residuos peligrosos y no peligrosos u otras sustancias (art. 7, DS. 148/2003), debiendo cumplir con algunas exigencias los contenedores de residuos peligrosos además, se debe contar con un plan o manejo de residuos peligrosos presentados a la autoridad sanitaria y en caso de encomendar a un tercero el transporte o eliminación de sus residuos peligrosos, será responsable de b) realizar la eliminación de sus residuos peligrosos en Instalaciones de Eliminación que cuenten con la debida Autorización Sanitaria que comprenda tales residuos (art. 27, DS. 148/2003), asimismo el reglamento dispone que se debe establecer un manejo diferenciado entre los residuos peligrosos y los que no lo son (art. 28) y con su correspondiente autorización sanitaria de instalación (art. 29), debiendo además contar con un proyecto previamente aprobado por la autoridad sanitaria. Por otra parte, el reglamento en comento establece que Los sitios donde se almacenen residuos peligrosos deberán cumplir con condiciones, tales como, contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura; Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la población; Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados; contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93 y deberán quedar sujetos al sistema de Declaración Seguimiento de tales residuos, válido para todo el país, que tiene por objeto permitir a la autoridad sanitaria disponer de información completa, actual y oportuna sobre la tenencia de tales residuos desde el



Foja: 1

momento que salen del establecimiento de generación hasta su recepción en una instalación de eliminación.

Por otra parte, en relación al DS 594/1999, la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, debiendo contar con autorización sanitaria la acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo. Asimismo, las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente. Debiendo suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias.

Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario. Finalmente el almacenamiento de materiales deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores.

Que, analizados los hechos constatados en el acta de fojas 16 y la declaración del Fiscalizador y Ministro de fe que levantó el Acta N° 4954/2015, se puede colegir que ellos dicen relación directa con las hipótesis planteadas por el legislador en los mencionados artículos infringidos, de modo tal que, acertadamente, la sentencia de fecha 7 de junio de 2015, estableció que los preceptos fueron infringidos a la luz de los antecedentes que efectivamente obran en el Sumario.

Vigésimo: Que, en relación a la sanción aplicada, cabe hacer presente que ésta corresponde a las infracciones que se tuvieron por acreditadas y cometidas por la reclamante en el Sumario Sanitario. En este sentido, el artículo 174 del Código Sanitario dispone como sanción a las infracciones tanto a sus normas como a sus reglamentos y a las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud Pública de Chile, una multa de un décimo de UTM hasta 1.000 UTM. En el caso de autos, la sanción impuesta de 60 UTM, se enmarca perfectamente dentro del parámetro establecido en la ley.



Foja: 1

Vigésimo Primero: Que, finalmente, es pertinente recalcar que por mandato del artículo 170 del Código Sanitario, la judicatura ordinaria sólo puede dejar sin efecto o suspender las medidas sanitarias aplicadas por medio de un Sumario Sanitario, sin embargo, en ningún caso se le faculta para fijar una sanción distinta de la aplicada por la autoridad sanitaria, por lo anterior, no podrá hacerse lugar a la petición subsidiaria de rebajar la multa aplicada.

Décimo Segundo: Que, en cuanto a la vulneración del principio del principio de confianza legítima o la ausencia de motivación como vicio del procedimiento administrativo, resulto oportuno hacer presente que, estos vicio reclamados deben perseguirse a través de una acción diversa, por cuanto dicha causal no está contemplada en la competencia que le entrega el artículo 171 del Código Sanitario a este Tribunal a propósito de la reclamación materia de autos, razón por la cual se rechaza esta argumentación.

Vigésimo Tercero: Que, en nada altera lo antes razonado las restantes probanzas rendidas en el presente juicio y no analizadas, en conformidad a lo preceptuado por la ley.

Vigésimo Cuarto: Que, por todo lo anteriormente relatado, deberá desestimarse la acción impetrada con fecha 19 de octubre de 2016, según se dirá.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 156, 161, 163, 166, 171 y 174 del Código Sanitario; artículos 3, 36 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo aprobado por el D.S. 594/99 del Ministerio de Salud; artículos 4, 7, 8, 25, 27 letra b, 29, 33 y 80 del DS. N° 148 de 2003; artículos 1698, 1700, 1702, 1706, 2514 del Código Civil; 160, 170, 341, 342, 346 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás normas citadas y pertinentes,

Se Resuelve:

- I. Que se rechaza el reclamo contenido en la demanda de fecha 19 de octubre de 2016, en todas sus partes.
- II. Que se condena en costas a la reclamante por haber sido totalmente vencida.

Rol 26188-2016

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

Pronunciada por doña **María Sofía Gutiérrez Bermedo**, Juez Titular. Autorizada por doña **María José Contreras Morales**, Secretaria Subrogante.//



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Septiembre de dos mil veinte**

